

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001310501820170005101, promovido por la señora **LUZ ELENA ROMÁN ARANGO**, contra **PORVENIR S.A.**, a revisar el proceso en Consulta conforme lo establece el artículo 69 del C.P.T. Y S.S., por haber sido la decisión de primera instancia totalmente adversa a los intereses de la parte actora.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **230**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente causada por la muerte de su finado hijo Samuel Santiago Molina Román el 18 de agosto de 2015, con el retroactivo pensional correspondiente, los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

Para fundamentar sus pretensiones expuso que su hijo, el finado afiliado Samuel Santiago Molina Román falleció el 18 de agosto del año 2015, momento para el cual, se encontraba afiliado a Porvenir. Narró que, en vida, el joven Molina Román le colaboraba económicamente para el pago de servicios, y otros gastos del hogar necesarios para la supervivencia. En atención a ello, solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente ante la AFP Porvenir, quien resolvió su petición de manera negativa.

Admitida la demanda y notificada la pasiva, dio respuesta al libelo genitor sí:

Enunció que realizó los estudios necesarios por medio de la empresa Grupo de Tareas Empresariales que permitieron determinar la ausencia de dependencia económica existente con el afiliado, por lo cual, se rechazó la solicitud de pensión de sobreviviente y se accedió a la devolución de saldos. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones que denominó: ***“Inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda”, “Buena fe de la entidad demandada”, “Afectación a la sostenibilidad financiera”, “Compensación”, “Innominada o genérica”.***

En sentencia del Doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la pasiva de las pretensiones invocadas en su contra, ante la inexistencia de los requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente deprecada, condenando a la demandante al pago de las costas procesales.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La procuradora judicial de la parte accionada, realizó un breve recuento de las pruebas allegadas al proceso, reiterando lo enunciado en las alegaciones presentadas ante la juez de primera instancia, pues a su parecer la situación económica de la demandante no tuvo cambio alguno tras el fenecimiento de su hijo. Para fundamentar lo dicho, expuso las sentencias SL 327 de 2020, SL 2587 de 2019 de la CSJ y el artículo 167 del CGP sobre la carga de la parte actora de probar la calidad de beneficiaria de la pensión de sobreviviente deprecada, lo cual aduce, no se dio en el proceso. Indicó que se logró determinar, que por el contrario la demandante en su rol de madre, era la que, apoyaba económicamente a su hijo en los gastos y deudas que él tenía por lo cual peticiona no se haga condena alguna en su contra.

PROBLEMA JURÍDICO

En atención al grado jurisdiccional de consulta, consiste en determinar si a la señora Luz Elena Román Arango le asiste el pago de la pensión de sobreviviente consecuente a la muerte de su hijo el afiliado Samuel Santiago Molina Román. De ser así, en qué cuantía, desde qué momento y si hay lugar al pago de los intereses de mora e indexación.

CONSIDERACIONES

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Y el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción. Es así, como en la especialidad que nos atañe, quien pretende un derecho tiene la carga de alegar y probar los hechos que lo producen, situación que en voces de la Corte (CSJ SL, 22 abril 2004, rad. 21779) se explicó así:

«De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado»

En los casos de solicitud de prestación por muerte, la prestación se dirime de acuerdo a la norma que se encontraba vigente para el momento del fallecimiento del afiliado o pensionado. En este caso, reposa en el proceso prueba, que el señor Samuel Santiago Molina Román falleció el 18 de agosto del año 2015, momento para el cual, se encontraba vigente el artículo 73 de la ley 100 de 1997 que remite a los artículos 46 y 48 ibídem, el primero de ellos modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que indica:

“Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

- 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,*
- 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:*

PARÁGRAFO 1o. *Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.”*

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que, a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.”

Igualmente, el artículo 74 de la Ley 100 de 1993 establece en su literal D:

“A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este;”

Procede la Sala a verificar la prueba recaudada en la actividad procesal, con el fin de establecer la procedencia del derecho pretendido:

- El parentesco existente entre la demandante y el joven Samuel Santiago Molina Román se encuentra acreditado mediante registro civil de nacimiento.
- Con el certificado de defunción de indicativo serial 08566328 se probó el fenecimiento del joven Molina Román el 18 de agosto del año 2015.
- Evidentemente el finado se encontraba afiliado al fondo de pensiones Porvenir de acuerdo a formulario de afiliación suscrito el 20 de abril del año 2012, e historia laboral que data desde el mes de julio del año 2012 bajo el empleador Serconal, siendo el último registrado Eulen Colombia.

En la audiencia del artículo 80 del CPT y SS, se recepcionó el interrogatorio de parte de la demandante la cual, revisado a la luz del artículo 191 del CGP arrojó las siguientes confesiones:

Toda la vida ha trabajado en casas de familia. Su hijo le colaboraba para los gastos de los dos y para ayudarle a la hermana. Ayudaba en el arriendo, servicios y en el pago de la parabólica. Tanto ella como su hijo ganaban el salario mínimo, en total él colaboraba con \$250.000. Enunció que su hijo tenía un crédito en un almacén, pagaba la moto y le ayudaba quincenal. Ella cubría sus gastos personales. Su hijo le pedía ayuda económica a ella para

tanquear la gasolina a mitad de mes. Desde que Samuel Santiago comenzó a trabajar se le colaboraba económicamente a una hermana de la demandante con la suma de \$200.000 y actualmente, la deponente todavía le ayuda.

Se recibieron Testimonios de:

Olga Lucia Vélez Acosta.

Indicó que conoce a la demandante desde hace 27 años, sabe que vive sola y que tuvo un hijo de nombre Samuel Santiago que ya falleció. Sabe que el señor Samuel para el momento de su fallecimiento pagaba una moto, pero no conoce qué otro gasto tenía. Conoce que Samuel partía los gastos con su madre. Sabe que la demandante tiene una hermana a la que le colabora económicamente y en ocasiones también le ayuda a su padre. Sabe que Luz Elena suple los gastos con lo que gana trabajando y que partía gastos con su hijo.

Por su parte, la señora **Berta Lilia Román Arango**, hermana de la demandante, declaró:

Que conoce que su hermana vivía con su hijo Samuel Santiago en San Javier. La demandante sigue viviendo en la misma casa en la que vivía con su hijo y pagando el mismo arriendo en cuantía de \$200.000. Samuel Santiago pagaba los servicios, y entre los dos pagaban el arriendo. La casa en la que vive la demandante es de propiedad de la deponente, pues era consecuencia de la herencia dejada a ambas por su padre, pero la señora Luz Elena Román le vendió su parte a su hermana en cuantía de veinticinco millones. Sabe que el dinero que ganaba Samuel Santiago era para el sostenimiento de ambos. Los servicios públicos que pagaba el afiliado era en cuantía de ciento veinte mil pesos. Aclaró que la señora Luz Elena le ayuda a ella con el pago de doscientos mil pesos y con los alimentos o algo que necesite, por lo menos

cien mil pesos más. Luz Elena le ayudaba económicamente a su hijo cuando él se quedaba corto a fin de mes.

De acuerdo a todos los elementos de prueba recaudados, debe decidirse si en cabeza de la demandante confluyen con requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente.

Sea lo primero indicar, que teniendo en cuenta el fallecimiento del afiliado, se verifica que entre 18 de agosto del año 2012 y la misma calenda del año 2015, cuenta con un total de 147 semanas cotizadas, por lo que, dejó causado el derecho a la pensión de sobreviviente en el caso de existir beneficiarios.

Teniendo en cuenta que la solicitud pensional radica en el literal d del artículo 74 de la ley 100 de 1993 ya anotado, y el parentesco es un tema superado, debe constatarse la “dependencia económica” que la norma narra.

Para la Sala, es determinante explicar, que en el contexto de la seguridad social tanto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional, han concluido que la dependencia económica se traduce en el estado de necesidad que se predica de quien depende económicamente, frente a la persona que asume la obligación de su sustento. Basta que exista una correlación entre la necesidad del aporte recibido y la vida digna de quien ostenta la calidad de beneficiario, con lo que, el análisis de la dependencia debe enfocarse, en si cercenada la ayuda proporcionada, la solicitante entraría en un estado de afectación considerable de sus derechos fundamentales.

En la sentencia SL 4097 del año 2021, la Sala de Casación Laboral determinó que, respecto a la dependencia económica de los padres, no es procedente individualizar los gastos de cada una de las personas que conforman el grupo familiar, pues los aportes de cada uno de los integrantes del núcleo ingresan a un presupuesto que es considerado común y que tiene como único fin preservar y atender la vida digna y la congrua subsistencia de todos los habitantes aclaró:

“... la suma que el causante le suministraba a la promotora del proceso que, según el Tribunal, era de \$300.000 mensuales, suma cierta, regular, periódica y no eventual, sin duda, era significativa para el año 2004, y fue imprescindible para garantizarle a la madre la satisfacción de los requerimientos primordiales, tales como, pago del arriendo, servicios y alimentación (fl. 42), pues si se tiene en cuenta que «las necesidades de quienes integran el hogar común en lo que toca con servicios públicos, salud, vestuario, alimentación dentro y fuera del hogar, y desplazamientos para atender lo propio de la jornada laboral y las actividades diarias, siempre que estén dentro del ámbito de la congrua subsistencia y atiendan al concepto de una vida digna, entran en el presupuesto común de gastos» (sentencias CSJ SL3315-2020 y CSJ SL650-2020).

Llegados a este punto del sendero, una cosa debe quedar claro: la disposición legal que consagra el derecho a la pensión de sobrevivientes de los padres no prohíbe que otras personas concurren con el sostenimiento de los mismos junto con el afiliado, sino que sencillamente obliga a que se averigüe si el aporte que daba el fallecido era preponderante en el conjunto de los ingresos y, en el asunto bajo escrutinio, se observa, como quedó dicho, que el causante contribuía con el 44% del total de los gastos familiares, lo que, a las claras y sin duda alguna, constituía un aporte preponderante, esencial y necesario para su sostenimiento en condiciones dignas, dicho en breve: era imprescindible para garantizar a su madre la satisfacción de los requerimientos primordiales; de tal suerte que la argumentación de la censura tendiente a edificar un error por el supuesto desatino del juzgador en ese sentido, no puede erigirse como un dislate protuberante del Tribunal.

Vale recordar que esta Sala ha determinado que no se requiere la carencia absoluta y total de ingresos o que el eventual beneficiario o beneficiaria se encuentre en la «indigencia», de modo que si existen asignaciones mensuales, ingresos adicionales o cualquier otra acreencia de la que son titulares, no por ello puede afirmarse que la persona se constituya en autosuficiente económicamente y, a esa conclusión, precisamente fue a la que arribó el fallador.”

Corolario a ello, cada caso debe ser estudiado en detalle con el fin de verificar si lo aportado por el finado afiliado hacía parte de una comunidad de gastos, un apoyo en general, como comunidad o por el contrario, una ayuda significativa, periódica, constante y determinante, cuyo retiro iría en contra de la vida digna y congrua del núcleo familiar y no simplemente la ayuda que, un buen hijo da a su progenitora.

La señora Luz Elena Román Arango expuso en el interrogatorio de parte que laboraba en casas de familia, dicha situación en principio, no es óbice para el reconocimiento pensional, pues el hecho que tenga cierta independencia económica no quiere decir, que aquello que era suministrado por su hijo no sea necesario para su subsistencia. (CSJ SL14923-2014, CSJ SL2800-2014 y 3137-CSJ SL-2021)

Sin embargo, con la prueba testimonial y las confesiones de parte si quedó claro, que la señora Luz Elena Román Arango recibía de su hijo un aporte de doscientos mil pesos mensuales, con lo que se pagaban algunos gastos, pero que, no era determinante para el sostenimiento digno de la demandante, quien, pese a la muerte de su hijo, y haber dejado de recibir dicha ayuda, sigue viviendo en el mismo lugar, pagando el mismo arriendo, teniendo los mismos gastos y colaborándole económicamente a su hermana la señora Berta Lilia Román Arango, para el cubrimiento de sus necesidades básicas.

Es de relevar que más allá de ser el joven Samuel Santiago Molina Román quien apoyaba económicamente a su madre, se trataba simplemente de una comunidad de apoyo mutuo, pues cuando el mismo afiliado se encontraba en aprietos económicos, la demandante era quien le ayudaba económicamente, otorgando lo necesario para solventar algunos gastos.

No encuentra la Sala entonces, que la señora Luz Elena Román Arango haya sufrido una desmejora en su condición de vida en el entendido de dignidad y conservación de sus derechos fundamentales tras la muerte de su hijo Samuel Santiago Molina Román y el cese del aporte económico que este daba para el hogar, por lo que, no cuenta con la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que pretende.

Así las cosas, la sentencia consultada será Confirmada.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar íntegramente la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3fb162f95eea6d0b954edd7d429ec65b06ed27bbca8c1222280c6ea59cecabb**

Documento generado en 28/07/2023 03:19:04 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>